MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO ABREVIADA

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN EL REAL DECRETO 928/1998, DE 14 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL Y PARA LOS EXPEDIENTES LIQUIDATORIOS DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Y EL REAL DECRETO 138/2000, DE 4 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO	3
I. JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE UNA MEMORIA ABREVIADA.	7
II. OPORTUNIDAD DE LA NORMA.....	7
1. Motivación.	7
2. Fines y objetivos perseguidos.	7
3. Análisis de alternativas.....	8
4. Adecuación de la norma a los principios de buena regulación.....	9
5. Plan Anual Normativo.....	10
III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO.....	10
IV. ANÁLISIS JURÍDICO.....	13
1. Fundamentación jurídica y rango normativo.	13
2. Adecuación al orden de distribución de competencias.....	14
3. Normas que quedarán derogadas.....	15
4. Justificación de la entrada en vigor.	15
V. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.....	16
VI. ANÁLISIS DE IMPACTOS.....	17
Impacto económico y presupuestario.....	17
Cargas administrativas.....	17
Impacto por razón de género.	18
Impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia.	18
Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.....	19
VII. EVALUACIÓN <i>EX POST</i>	19

FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO

Ministerio/Órgano proponente	Ministerio de Trabajo y Economía Social Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones	Fecha	Abril 2022
Título de la norma	Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la seguridad social, y el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en materia de administración electrónica		
Tipo de Memoria	Normal ☐ Abreviada ☒		
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA			
Situación que se regula	Adaptación a la administración electrónica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los procedimientos administrativos sancionador en el orden social y liquidatorio de cuotas de la Seguridad Social		
Objetivos que se persiguen	<ul style="list-style-type: none"> • Agilizar el procedimiento administrativo sancionador en el orden social, así como el procedimiento liquidatorio de cuotas de la Seguridad Social. • Reducir las cargas administrativas asociadas a los procedimientos indicados, evitando desplazamientos físicos para la realización de trámites administrativos. • Cumplir la normativa ya en vigor sobre administración electrónica, contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en sus normas de desarrollo. • Reducir el uso de papel en la actividad de la Administración. • Facilitar la acreditación de la representación de aquellos sujetos que se relacionan con la Inspección. 		
Principales alternativas consideradas	Si no se adoptara normativa alguna, se aplicaría la normativa general contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en su reglamento de desarrollo. Sin embargo, se desea ampliar el ámbito de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Inspección y las Administraciones que intervienen en el procedimiento sancionador y liquidatorio, y ello exige una regulación específica. Además, se persigue que haya una misma regulación para todas las		

	<p>administraciones que intervienen en el procedimiento sancionador y liquidatorio.</p> <p>En cuanto a las alternativas regulatorias, sería posible la regulación total de esta materia en el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, y en el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, pero se ha optado por la menor intervención posible del ordenamiento jurídico, incluyendo unos aspectos básicos de la regulación en los citados reales decretos y un desarrollo regulatorio a través de dos órdenes ministeriales: una referida a la notificación electrónica y otra referida al registro electrónico de apoderamientos.</p>
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO	
<p>Base jurídica y rango normativo</p>	<p>El proyecto se fundamenta en lo previsto en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en particular en sus artículos 3, 41 y 43 y en la disposición adicional primera.dos; - La Sección 2ª del Capítulo III del Título II del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021. - El artículo 51 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto <p>La norma tiene rango de real decreto, con arreglo a lo previsto en el artículo 24.1 c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno</p>
<p>Adecuación al orden de competencias</p>	<p>El real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1, reglas 7ª, 17ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas; legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas; y procedimiento administrativo común.</p>
<p>Estructura de la Norma</p>	<p>Consta de un preámbulo, dos artículos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.</p>
<p>Normas que quedarán derogadas</p>	<p>No se deroga expresamente ninguna norma.</p>
<p>Justificación de la</p>	<p>La norma proyectada entrará en vigor el día 1 de julio de 2022, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Gobierno.</p>

entrada en vigor		
DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y CONSULTAS		
Consulta pública	Sí ☒ No ☐ Se ha realizado consulta pública a tenor del artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, publicándose en el punto de acceso de participación pública de la página Web del Ministerio de Trabajo y Economía Social desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 7 de enero de 2022.	
Audiencia e información públicas	Sí ☒ No ☐ Se ha dado cumplimiento a tenor del artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Además, se ha sometido el proyecto a consulta de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.	
Tramitación urgente		
Informes recabados	<p>El proyecto ha sido informado por la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y de la Secretaría General Técnica del Departamento.</p> <p>El proyecto ha de recibir la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública.</p> <p>Se recabará informe de las Comunidades Autónomas. Además, el proyecto requiere informe de distribución competencial del Ministerio de Política Territorial, con arreglo a lo previsto en el sexto párrafo del artículo 26.5 de la Ley del Gobierno</p> <p>Debe recabarse dictamen del Consejo de Estado.</p>	
ANÁLISIS DE IMPACTOS		
Impacto económico y presupuestario	Efectos sobre la economía en general.	Carece de implicaciones económicas o presupuestarias.
	En relación con la competencia	☒ La norma no tiene efectos significativos sobre la competencia. ☐ La norma tiene efectos positivos sobre

		<p>la competencia.</p> <p>☐ La norma tiene efectos negativos sobre la competencia.</p>
	Desde el punto de vista de las cargas administrativas	<p>☐ Supone una reducción de cargas administrativas.</p> <p>☐ Incorpora nuevas cargas administrativas.</p> <p>☒ No afecta a las cargas administrativas.</p>
	<p>Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma</p> <p>☐ Afecta a los presupuestos de la Administración del Estado.</p> <p>☐ Afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales.</p>	<p>☐ Implica un gasto:</p> <p>☐ Implica un ingreso.</p> <p>☒ Impacto neutro</p>
Impacto de género	La norma tiene un impacto de género:	<p>Negativo ☐</p> <p>Nulo ☒</p> <p>Positivo ☐</p>
Otros impactos considerados	<p>La norma proyectada no tiene impacto en materia de familia, infancia y adolescencia.</p> <p>La norma tiene un impacto medioambiental positivo, en la medida en que reduce el uso del papel en la actividad administrativa</p>	

I. JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE UNA MEMORIA ABREVIADA.

Esta memoria se ha elaborado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por la que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, se ha optado por la elaboración de una memoria abreviada puesto que del proyecto no se derivan impactos apreciables en los ámbitos a los que alude el artículo 2 del citado real decreto (impacto económico o presupuestario, impacto de género, en la infancia y adolescencia o en la familia).

II. OPORTUNIDAD DE LA NORMA.

1. Motivación.

El establecimiento de un principio general de tramitación electrónica de las actuaciones inspectoras y de los procedimientos en el orden social, la definición de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente en este ámbito, así como la creación del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tiene una doble motivación:

- cumplir el mandato contenido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el sentido de hacer realidad la tramitación electrónica el procedimiento administrativo sancionador en el orden social, el procedimiento liquidatorio de cuotas de la Seguridad Social, así como las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- dar impulso a la administración electrónica en el orden social, dando lugar a una administración más moderna, ágil y eficaz.

2. Fines y objetivos perseguidos.

- Agilizar el procedimiento administrativo sancionador en el orden social, así como el procedimiento para la extensión de actas de liquidación de

cuotas de la Seguridad Social, coadyuvando a la consecución de una Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente.

- Reducir las cargas administrativas asociadas a los procedimientos indicados, evitando desplazamientos físicos para la realización de trámites administrativos.
- Reducir al mínimo el uso del papel en la actividad de la Administración, contribuyendo así a la sostenibilidad medioambiental.

3. Análisis de alternativas.

La primera alternativa analizada consiste en no adoptar ninguna normativa. En tal caso, se aplicaría en este ámbito la normativa general sobre administración electrónica contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP) y en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Sin embargo, la norma tiene dos objetivos fundamentales que no podrían cumplirse sin una regulación específica:

- La ampliación del ámbito de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las Administraciones que intervienen en el procedimiento sancionador y liquidatorio,
- El establecimiento de una regulación común a las administraciones que intervienen en estos procedimientos, en lo que se refiere a administración electrónica.

En cuanto a las alternativas regulatorias, la regulación de las notificaciones y comunicaciones electrónicas en el ámbito del procedimiento sancionador y liquidatorio se realiza a través de dos normas: una modificación mínima del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, y del Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, dirigida a establecer los elementos esenciales de la nueva regulación (básicamente los sujetos obligados a la notificación electrónica y la creación del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social), junto con un desarrollo normativo a través de una Orden del Ministro de Presidencia, a propuesta de los Ministerios afectados. A ello se añade una segunda orden ministerial reguladora del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Ciertamente, sería posible incluir la totalidad de la regulación en una única norma con rango de real decreto, siendo posible tanto una norma independiente como una modificación de los reales decretos citados. Ahora bien:

- Un real decreto independiente que regulara las notificaciones electrónicas obligaría a los operadores jurídicos a coexistir con dos normas paralelas para tramitar los procedimientos sancionadores y liquidatorios.
- En cuanto a la posibilidad de incluir toda la nueva regulación en el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, y en el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, hay que tener en cuenta que la normativa sobre administración electrónica constituye una materia jurídica nueva y que es objeto de frecuente actualización, al objeto de adecuarla al progreso tecnológico y a la introducción de nuevas formas de actuar en la Administración. En este sentido, se considera preferible que esas actualizaciones que se puedan producir en el futuro se realicen mediante modificaciones de normas con rango de orden ministerial, sin afectar a la regulación contenida en los reales decretos citados.

Por esta razón, se ha optado por una modificación puntual del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, y del Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, que establezca los elementos esenciales, junto con un desarrollo normativo a través de órdenes ministeriales.

4. Adecuación de la norma a los principios de buena regulación.

El contenido y la tramitación de este real decreto es coherente con los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En relación con los principios de necesidad y eficacia, la norma persigue el interés general, así como agilizar los procedimientos administrativos en el ámbito del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dotándolos de mayor seguridad y facilitando a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos ante el Sistema.

Asimismo, la norma se adecúa al principio de proporcionalidad, sin que sea restrictiva de derechos, sino al contrario, garante de los mismos, de acuerdo

con la regulación legal que desarrolla. Además, se adopta esta regulación con la menor intervención posible en el ordenamiento jurídico. En este sentido, se ha optado por una regulación básica contenida en los reales decretos anteriormente citados, completando esa regulación a través de normas de rango inferior.

Por otra parte, la norma es respetuosa con el principio de seguridad jurídica, al establecer una regulación coherente con el resto del ordenamiento jurídico, clara, y que facilita la actuación y toma de decisiones por los interesados. En cuanto al principio de eficiencia, esta norma minora las cargas administrativas para los ciudadanos y, si bien su aplicación efectiva exige adaptaciones en los medios utilizados por el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para relacionarse con los ciudadanos, su coste es totalmente proporcionado a los beneficios que reporta.

Finalmente, cumple el principio de transparencia en tanto que, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, esta norma se ha sometida al a los trámites de consulta pública y audiencia e información pública.

5. Plan Anual Normativo.

El real decreto no está incluido en el Plan Anual Normativo a que se refiere el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO.

El proyecto consta de un **preámbulo, dos artículos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.**

A continuación, se explican las disposiciones que contiene la norma proyectada.

ARTICULADO

- El **artículo primero** modifica el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, en los siguientes aspectos:

- Se introduce un apartado 4 en el artículo 1 para establecer un principio general de tramitación electrónica de los procedimientos sancionador y liquidatorio. Ello es coherente con el principio general contenido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que consagra la tramitación electrónica como fórmula habitual de relación entre la Administración y los ciudadanos.
 - Se introduce un nuevo artículo 2 bis para definir los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las administraciones competentes para la tramitación de los procedimientos sancionador y liquidatorio. Esa definición se hace por referencia a un nuevo artículo contenido en el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ROFIT). Esta técnica normativa se explica por cuanto el ámbito de actuación de la ITSS no se limita al procedimiento sancionador y liquidatorio, abarcando más actuaciones (órdenes de paralización, propuestas de recargo de prestaciones, etc.).
 - Se modifica el artículo 22 para aclarar que el cómputo de los términos y plazos establecidos en esta norma, así como el régimen de notificaciones y comunicaciones, deben atenerse también a lo establecido en las normas que se dicten en su desarrollo. Con ello se pretende una mejor coherencia e integración del régimen jurídico aplicable.
 - Se modifica el apartado primero del artículo 33, relativo a la notificación y resolución de las actas de liquidación, para facilitar la notificación electrónica de actas de liquidación de gran volumen.
- El **artículo segundo** recoge las modificaciones introducidas en el ROFIT, que son las siguientes:
- Se introduce un nuevo artículo 14 bis con dos objetivos. Por un lado, establecer un principio general de funcionamiento de la

ITSS por medios electrónicos, coherente con el principio general establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Por otro lado, explicitar la posibilidad de que la Inspección y otros órganos, organismos o entidades de la Administración estatal o autonómica desarrollen aplicaciones informáticas dirigidas a la tramitación conjunta de procedimientos administrativos. Esta práctica, que agiliza los procedimientos y reduce la carga administrativa de las Administraciones intervinientes, se encuentra ya prevista en la normativa de carácter general; en concreto en el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el artículo 25 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

- En segundo lugar, se introduce un nuevo artículo 14 ter, en el que se establecen los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la ITSS. Se hace uso aquí del margen otorgado por el artículo 14 de la LPACAP, incluyendo entre los sujetos obligados a todos aquellos colectivos que, en razón de su actividad profesional, se considera que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos precisos para mantener esa relación electrónica. Fuera quedan los trabajadores por cuenta ajena, así como los empleadores del hogar, quienes podrán elegir relacionarse electrónicamente o en soporte papel con las Administraciones incluidas en el ámbito del Reglamento.
- En tercer lugar, se modifica el artículo 21, relativo a la capacidad de obrar ante la ITSS. Las modificaciones introducidas en este artículo persiguen ajustar este aspecto al nuevo marco establecido en la normativa de carácter general en materia de administración electrónica. Así, por un lado, se establecen como modos habituales de acreditación de la representación el apoderamiento apud acta, otorgado por comparecencia personal o en sede electrónica, así como la inscripción del apoderamiento en el registro electrónico de apoderamientos. Por otro lado, se crea el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como medio para facilitar la inscripción de los apoderamientos otorgados para actuar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Este Registro se crea con vocación

de acoger los apoderamientos para actuar ante otros órganos administrativos de la Administración General del Estado, ante los órganos autonómicos de inspección de trabajo y ante las autoridades laborales de las comunidades autónomas. Todo ello entendido como una fórmula que beneficia al ciudadano, pues evita la dispersión de órganos a los que debe acudir para tramitar un procedimiento administrativo.

DISPOSICIONES DE LA PARTE FINAL

- La **disposición transitoria única** establece las reglas necesarias de transitoriedad para garantizar una entrada en vigor ordenada de la nueva normativa.

A tal efecto, establece la aplicación de la nueva normativa sólo para las actuaciones inspectoras y los procedimientos administrativos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la norma.

- La **disposición final primera** define el título competencial de la norma, fundamentándose en las reglas 2ª, 7ª, 17ª y 18ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que son las habituales en las normas propias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- La **disposición final segunda** establece la entrada en vigor de la norma.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO.

1. Fundamentación jurídica y rango normativo.

Este proyecto se fundamenta en lo previsto en la LPACAP, y en particular en sus artículos 3, 41, 42.1 y 43, que regulan las notificaciones electrónicas y la posibilidad de ampliar la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración a determinados colectivos; también sus artículos 5 y 6, sobre representación y registros electrónicos de apoderamientos. Estos preceptos legales encuentran desarrollo reglamentario de carácter general en el Capítulo III del Título II del Reglamento de actuación y funcionamiento del

sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la disposición adicional primera.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento administrativo sancionador en el orden social y el procedimiento liquidatorio de cuotas de la Seguridad Social se rige por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la propia Ley. De modo similar, el artículo 51 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, establece que “corresponde al Gobierno dictar el Reglamento de procedimiento especial para la imposición de sanciones del orden social”.

Sobre esta base, los procedimientos administrativos citados se regulan en el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

Al mismo tiempo, el modo de actuar de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se encuentra regulado también en el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por tanto, para adecuar la actividad de la Inspección a las obligaciones establecidas en materia de administración electrónica es preciso modificar ambos reales decretos.

En cuanto al rango normativo de la norma, ésta ha de adoptar la forma de real decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, por cuanto tiene naturaleza de reglamento y es aprobado por el Consejo de Ministros.

2. Adecuación al orden de distribución de competencias.

La norma proyectada tiene el mismo fundamento constitucional que la mayoría de las normas relativas a Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El ámbito de actuación de la ITSS y el ámbito de los procedimientos sancionador en el orden social y liquidatorio de cuotas de Seguridad Social abarcan diversas materias, y ello explica el fundamento múltiple en

competencias exclusivas del Estado establecidas en el artículo 149.1 de la Constitución Española. En particular, se fundamenta en las siguientes reglas:

- a) Regla 2.^a, sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
- b) Regla 7.^a, sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
- c) Regla 17.^a, sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
- d) Regla 18.^a, sobre procedimiento administrativo común.

Por otra parte, en la tramitación de la norma se ha solicitado informe de las Comunidades Autónomas y se ha recabado informe de distribución competencial, con arreglo a lo previsto en el artículo 26.5, último párrafo, de la Ley del Gobierno.

3. Normas que quedarán derogadas.

No se dispone la derogación de ninguna norma.

4. Justificación de la entrada en vigor.

Resulta aplicable la regla prevista en el artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que prevé el comienzo de la vigencia el 2 de enero o el 1 de julio cuando la norma imponga nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta.

Ello en la medida en que la nueva normativa establece la obligatoriedad de determinados sujetos de relacionarse electrónicamente con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las Administraciones competentes para la tramitación de los procedimientos sancionador en el orden social y liquidatorio de cuotas de la Seguridad Social.

De acuerdo con lo anterior, se establece como fecha de entrada en vigor la de 1 de julio de 2023.

V. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.

Se ha realizado trámite de **consulta pública**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, publicándose en el punto de acceso a la participación pública en proyectos normativos de la página Web del Ministerio de Trabajo y Economía Social desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 7 de enero de 2022.

Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.6 de la citada Ley 50/1997, de 27 de noviembre, **se publicará el texto** en el citado sitio web correspondiente, con el objeto de dar **audiencia** a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

Además, se recabará específicamente información de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

En relación con los **informes evacuados**, cabe indicar:

- 1) El proyecto ha sido informado por la Comisión Ministerial de la Administración Digital del Ministerio de Trabajo y Economía Social, conforme a lo previsto en el artículo 2.2 j) de la Orden TES/1214/2021, de 29 de octubre.
- 2) **Se recabará informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en virtud de lo previsto en el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley del Gobierno.**
- 3) **Se recabará informe de la Agencia Española de Protección de datos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.b) del Estatuto de la indicada Agencia, aprobado por el Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.**
- 4) **Se debe recabar la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 26.5, párrafo quinto, de la referida Ley del Gobierno.**
- 5) **Se recabará informe de las Comunidades Autónomas. Además, el proyecto requiere informe de distribución competencial del Ministerio de Política Territorial, con arreglo a lo previsto en el sexto párrafo del artículo 26.5.**

6) Al tratarse de una disposición reglamentaria dictada en ejecución de una ley, resulta preciso el **dictamen previo del Consejo de Estado**, por encontrarse entre los supuestos recogidos a tal efecto en los artículos 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, concretamente en el artículo 22.Tres

VI. ANÁLISIS DE IMPACTOS.

Impacto económico y presupuestario.

No se aprecia impacto alguno en la economía y tampoco un impacto presupuestario.

Cargas administrativas.

La norma comporta una reducción de las cargas administrativas para los interesados, en la medida en que sustituye tramitación en papel por tramitación electrónica para un colectivo significativo de beneficiarios.

En este sentido, puede calcularse el ahorro que suponen sustituir la realización presencial de trámites en el procedimiento sancionador y liquidatorio por la realización electrónica.

- Se toman como referencia los datos el año 2019, ejercicio previo a la pandemia y, por ello, más extrapolable en términos de número de actuaciones inspectoras, procedimientos, etc.
- Se estima que cada procedimiento sancionador o liquidatorio conlleva, al menos, un trámite por parte del sujeto responsable, de tal manera que:
 - Núm. Procedimientos sancionadores: 63.728
 - Núm. Trámites de sujetos responsables: 63.728
- No obstante, se considera que el ahorro se produce porque un colectivo de sujetos que antes de la aprobación de la norma realizaban trámites en papel deberán hacerlo de forma electrónica. En este sentido, en el año 2019 se extendieron actas de infracción a 23.331 personas físicas y 40.397 actas a personas jurídicas.

Por tanto, el número de trámites que pasarían de realizarse en papel a realización electrónica sería de 23.331.

- Finalmente, se consideran los costes contemplados en la tabla para la medición de costes directos de las cargas administrativas de la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo. En este sentido, la tabla establece:
 - Coste de presentación de solicitud presencial: 80
 - Coste de presentación de una solicitud electrónica: 5
- En consecuencia, el coste del nuevo modelo de actuación, frente al precedente, supone un ahorro de 1.749.825 considerando lo siguiente:

	Núm. Trámites	Coste unitario	Coste total
Regulación anterior	23.331	80	1.866.480
Nueva regulación	23.331	5	116.655
		Ahorro	1.749.825

Impacto por razón de género.

La norma proyectada carece de impacto por razón de género. Por otra parte, el lenguaje utilizado en la redacción de la futura norma no contiene expresiones sexistas.

Impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se informa que el contenido del proyecto no tiene impacto alguno en la infancia y la adolescencia.

Por otro lado, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, introducida por la disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la

adolescencia, se señala que el contenido del proyecto, por las razones apuntadas, tampoco tiene impacto en la familia.

Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Cabe apreciar la existencia de impactos positivos en el uso de los medios y servicios de la Administración digital.

VII. EVALUACIÓN *EX POST*.

Por lo que respecta a lo previsto en el artículo 2.1 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa, esta norma no se incluye en el Plan Anual Normativo.

Por la misma razón, no está prevista su evaluación ex post.